



CONSTANCIA SECRETARIA. Túquerres, 04 de diciembre de 2023. En la fecha doy cuenta a la señora Jueza con la presente acción de tutela No. 52-838-31-03-001-2023-00109-00, instaurada a nombre propio por la señora AMANDA GARCÍA NASTACUAZ en contra de la REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, MINISTERIO DEL INTERIOR, GOBERNACION DE NARIÑO y los DELEGADOS DEL REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, la cual correspondió por reparto a este Juzgado. Sírvese proveer.

OMAR FERNANDO GOYES CAICEDO
Escribiente

JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO

Túquerres, Nariño, cuatro (04) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Sustanciación No. 0192

Referencia:	Acción de Tutela
Radicación:	52-838-31-03-001-2023-00109-00
Accionante:	Amanda García Nastacuaz
Accionadas:	Registraduría Nacional Del Estado Civil y Otros

Actuando en ejercicio de la acción consagrada por el artículo 86 de la Constitución Política, la señora AMANDA GARCÍA NASTACUAZ, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.134.529.542 de Ricaurte, en forma personal, interpuso acción de tutela en contra de la REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, MINISTERIO DEL INTERIOR, GOBERNACION DE NARIÑO y los DELEGADOS DEL REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, por considerar que se le han vulnerado sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso administrativo y derecho a elegir y ser elegido en conexidad con el derecho al sufragio y al principio democrático de eficacia del voto y democracia participativa, consagrados por la Carta fundamental.

SE CONSIDERA:

Este Despacho es competente para conocer de la presente acción de tutela, teniendo en cuenta que de conformidad a lo señalado en el en el Decreto 333 de 2021, artículo primero numeral 2, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categoría.

Teniendo en cuenta la informalidad que gobierna la acción consagrada en el artículo 86 de la Carta Política, se observa que la solicitud reúne los requisitos señalados en los artículos 14 y 37 del Decreto 2591 de 1991.

Se observa en el escrito referido, solicitud de medida provisional, consistente en ordenar al *"Gobernador del Departamento de Nariño, modifique el acto administrativo contenido en el Decreto 828 del 10 de noviembre de 2023, mediante el cual, decidió diferir las elecciones en el Municipio de Ricaurte para el cargo de Alcalde y Concejo Municipal para el día 10 de diciembre de 2023, en el sentido DE ADICIONAR QUE EN LAS ELECCIONES A REALIZARSE EL 10 DE DICIEMBRE DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE SE DIFIERA TAMBIÉN PARA EL CARGO DE DIPUTADOS A LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO"*¹.

Lo anterior, debido a que, a su juicio, *"se garantiza el derecho al sufragio de elegir de los 12.856 ciudadanos y el derecho fundamental de ser elegido de los candidatos a la Asamblea Departamental de Nariño, pues habría la posibilidad de cambiar o mutar los resultados electorales del acto administrativo electoral*

¹ Documento 4, folio 1 y 2, expediente digita.

*Formulario E26, mediante el cual se declaró la elección como Diputados a la Asamblea Departamental de Nariño por los Delegados Departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, quienes por haber sido suspendidas las elecciones por motivos de orden público no pudieron ejercer dichos derechos fundamentales"*².

Frente a la medida provisional en sede de tutela, el artículo 7º del Decreto 2591 de 1.991, señala lo siguiente:

"Artículo 7º. Medidas provisionales para proteger un derecho. Desde la presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere.

Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o la continuidad de la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público. En todo caso el juez podrá ordenar lo que considere procedente para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del solicitante.

La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud por el medio más expedito posible.

El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida de conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo de conformidad con las circunstancias del caso.

El juez podrá, de oficio o a petición de parte, por resolución debidamente fundada, hacer cesar en cualquier momento la autorización de ejecución o las otras medidas cautelares que hubiere dictado."

Como se desprende de la norma citada, el juez constitucional dispone de una amplia competencia que le permite, a petición de parte o de oficio, "dictar cualquier medida de conservación o seguridad", destinada a "proteger un derecho" o a "evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados."

Ahora bien, al respecto la Honorable Corte Constitucional ha fijado unos requisitos para tener en cuenta, al momento de considerar la aplicación de una medida provisional, en aras de evitar el uso inadecuado de tal medida, así:

"(i) Que la solicitud de protección constitucional contenida en la acción de tutela tenga vocación aparente de viabilidad por estar respaldada en fundamentos: (a) fácticos posibles y (b) jurídicos razonables, es decir, que exista la apariencia de un buen derecho (fumus boni iuris); (ii) Que exista un riesgo probable de que la protección constitucional pretendida pueda verse afectada considerablemente por el tiempo transcurrido durante el trámite de revisión, esto es, que haya un peligro en la demora (periculum in mora); y (iii) Que la medida provisional solicitada no genere un daño desproporcionado a quien afecta directamente³. (...)"

² Documento 4, folio 1 y 2, expediente digita

³ Estos criterios se toman del Auto 312 de 2018 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez), pero han sido actualizados para que no se refieran únicamente a los casos de protección de un derecho a solicitud de parte, sino para que también reflejen el amplio rango de acción de las medidas provisionales de acuerdo con la jurisprudencia constitucional. Es decir, incluyendo la posibilidad de medidas provisionales *ex officio*, y para suspender, en favor del interés público, el goce de un derecho viciado. Para ello se tuvieron en cuenta los requisitos inicialmente sintetizados por el Auto 241 de 2010. M.P. María Victoria Calle Correa. Ver Auto 680 de 2018. M.P. Diana Fajardo Rivera, fundamento jurídico N° 53.

Con fundamento en lo previamente expuesto, y descendiendo al asunto de marras, encuentra el despacho que la accionante solicita que se ordené a la GOBERNACION DE NARIÑO, modificar el Decreto 828 del 10 de noviembre de 2023, mediante el cual, decidió diferir las elecciones en el Municipio de Ricaurte para el cargo de Alcalde y Concejo Municipal para el día 10 de diciembre de 2023, y en su lugar se adicione en dicha disposición los mismo efectos para la elección de los Diputados a la Asamblea Departamental de Nariño, pues de no ser así, se estaría vulnerado los derechos fundamentales de elegir y ser elegido de 12.856 ciudadanos del Municipio de Ricaurte.

En el sub judice, con la valoración de las razones jurídicas expuestas en la demanda de tutela, el despacho advierte que la medida provisional solicitada en esta sede no resulta necesaria, toda vez que no se encuentra acreditada, hasta este momento procesal, una situación de vulneración o total indefensión que constituya un perjuicio irremediable o un peligro inminente para la parte actora, máxime cuando lo acaecido resulta de las elecciones territoriales efectuadas el día 29 de octubre de 2023, y el Decreto 828 del 10 de noviembre de 2023, actuaciones desde las cuales ya ha transcurrido más de un mes, por lo cual se tiene que a la fecha de prestación de la acción constitucional, los candidatos electos a la Asamblea Departamental de Nariño, se encuentra debidamente reconocidos.

Así las cosas, no observa este juzgador que resulte procedente la adopción de la medida provisional deprecada por la accionante, pues no se vislumbran situaciones especiales de las señaladas por la jurisprudencia constitucional, que hacen viable su procedencia, y que haga suponer un daño desproporcionado e irreparable para que exista vocación aparente de viabilidad del amparo invocado o conjuración de un perjuicio irremediable, más aún, cuando dicha medida podría tener una incidencia contra derechos e intereses de terceros directamente relacionados con el presente tramite tutelar.

En consecuencia, se procederá a negar por improcedente la medida provisional solicitada.

Ahora bien, de la revisión del escrito tutelar y de sus pretensiones, el Despacho considera pertinente vincular al presente trámite al MUNICIPIO DE RICAURTE, a la PERSONERÍA MUNICIPAL DE RICAURTE, a la REGISTRADURIA MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE RICAURTE y a los candidatos a la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO que participaron en las elecciones llevadas a cabo el pasado 29 de octubre de 2023.

La vinculación se hace indispensable en consideración al interés que les pueda asistir en este asunto.

Por lo expuesto el Juzgado Civil del Circuito de Túquerres,

RESUELVE:

PRIMERO: ADMITIR la solicitud de tutela interpuesta por la señora AMANDA GARCÍA NASTACUAZ en contra de la REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, MINISTERIO DEL INTERIOR, GOBERNACION DE NARIÑO y los DELEGADOS DEL REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

SEGUNDO: Para determinar si se ha vulnerado o existe amenaza de vulneración del derecho fundamental que se señala en el escrito de tutela, solicítese a la REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, MINISTERIO DEL INTERIOR, GOBERNACION DE NARIÑO y los DELEGADOS DEL REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, a través de su representante legal o quien haga sus veces, quien en el término

improrrogable de DOS (2) días al recibo del oficio correspondiente, rinda el respectivo informe con las pruebas que quiera hacer valer, acerca de los hechos que motivaron la presente acción de tutela.

TERCERO: ORDENAR vincular al presente trámite al MUNICIPIO DE RICAURTE, a la PERSONERÍA MUNICIPAL DE RICAURTE, a la REGISTRADURIA MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE RICAURTE y a los candidatos a la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO que participaron en las elecciones llevadas a cabo el pasado 29 de octubre de 2023.

CUARTO: Para determinar si se ha vulnerado o existe amenaza de vulneración del derecho fundamental que se señala en el escrito de tutela, solicítese al MUNICIPIO DE RICAURTE, a la PERSONERÍA MUNICIPAL DE RICAURTE, a la REGISTRADURIA MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE RICAURTE y a los candidatos a la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO que participaron en las elecciones llevadas a cabo el pasado 29 de octubre de 2023, que en el término improrrogable de DOS (2) días al recibo del oficio correspondiente, rindan el respectivo informe con las pruebas que quiera hacer valer, acerca de los hechos que motivaron la presente acción de tutela.

QUINTO: TÉNGASE como pruebas los documentos aportados en el escrito de tutela.

SEXTO: NOTIFICAR por el medio más expedito de esta providencia al accionante, a las accionadas y las vinculadas, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, esto es, de forma expedita, haciendo la advertencia que, en caso de omisión de presentar el informe requerido por el Juez de Tutela, en el plazo otorgados, se dará aplicación a la presunción de veracidad contenida en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.

Para tal efecto corrasé traslado del escrito de tutela, pruebas, anexos y copia de la presente providencia.

SÉPTIMO: La REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADOS CIVIL, se servirá notificar la existencia de la presente acción a los candidatos a la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO que participaron en las elecciones llevadas a cabo el pasado 29 de octubre de 2023, a través de los correos electrónicos que reposen en sus archivos y en la pagina web de la entidad, anexando copia del escrito de tutela, sus anexos y de la presente providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ANA ISABEL GUEVARA ORDOÑEZ
Jueza